

For English version click [here](#)

Proceso Preparatorio de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo Primera sesión de redacción

29 de enero de 2015, Trusteeship Council Chamber, Sede de Naciones Unidas, Nueva York

Presentación realizada por Verónica Serafini Geoghegan de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN) en la sesión sobre Financiación Privada Doméstica e Internacional

Mi nombre es Veronica Serafini Geoghegan formo parte de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN) y del Grupo de Mujeres sobre Financiamiento para el Desarrollo (WWG on FfD). Entre hoy y ayer muchos se han referido a la importancia de incorporar efectivamente la igualdad de género en la agenda. Quisiera puntualizar en varios temas con respecto a esto:

- 1) En primer lugar, abogamos por respetar la estructura del Consenso de Monterrey que analiza por separado la movilización de recursos domésticos privados y la movilización de recursos internacionales, incluida la inversión extranjera directa.
- 2) Los recursos privados no puede reemplazar el papel de los estados en la movilización de los máximos recursos disponibles para garantizar los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental. El rol del sector privado debe sustentarse en el respeto a los derechos laborales y ambientales y en el pleno cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
- 3) Es necesario superar el paradigma de los incentivos a la Inversión Extranjera Directa basada en la “carrera a la baja”: disminución de impuestos y flexibilización de las normativas laborales y ambientales. Las brechas laborales de género no deben constituir una variable de competitividad.
- 4) Apoyamos la incorporación en el “[Elements Paper](#)” de la medida sobre analizar el impacto en los derechos humanos de los acuerdos comerciales y de inversión; sin embargo, dichas evaluaciones deben realizarse ex ante y ex post facto. El documento resultante de Adís Abeba debe establecer un instrumento multilateral vinculante para el sector privado para controlar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y estándares medioambientales, en línea con la resolución aprobada el Consejo de Derechos Humanos en este sentido¹.

¹ Resolución titulada "Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la relación a los Derechos Humanos "(A / HRC / 26 / L.22), aprobada el 26 de junio 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

5) Con respecto a la inclusión financiera, la evidencia empírica indica que el acceso al crédito tiene efectos contradictorios en las mujeres, ya que en muchos programas se han encontrado resultados negativos como un excesivo endeudamiento y empeoramiento de sus condiciones de pobreza, especialmente si no van acompañados de educación financiera y acceso a otros recursos productivos desde una perspectiva de derechos que fomenten su autonomía.

6) La relación de las Alianzas Público Privadas (APP) con las mujeres. Si bien las APP ya llevan varias décadas en funcionamiento, no existe suficiente evidencia empírica acerca de su desempeño exitoso en ninguna de las dimensiones que han servido de argumento para su implementación. Informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo Independiente de Evaluación del Banco Mundial², así como universidades y otras instituciones académicas señalan que no existen suficientes estudios ni evaluaciones de impacto que den cuenta de la eficiencia de las alianzas público-privadas ni mucho menos de su equidad socioeconómica.

Es más, los estudios existentes señalan que apenas el 10% de las alianzas beneficiaron a las personas en situación de pobreza. La única variable que ha tenido un resultado positivo en algunos casos fue el aumento de la cobertura, pero la evidencia indica que también se observan fracasos. Adicionalmente a las dudas acerca de los resultados positivos se agregan los riesgos fiscales. Varios estudios muestran sobrecostos que varían desde el 60% al 1.900%³.

Pocos estudios han incorporado el impacto social y un enfoque de igualdad de género. Se asume que si las coberturas de servicios e infraestructura se amplían para toda la población, las mujeres se beneficiarán también. La visión vinculada al “derrame” ya ha sido rechazada, no solo desde el enfoque original del crecimiento económico a la pobreza, sino también desde el análisis de género. Sabemos que si las políticas no explicitan en sus objetivos y acciones el interés prioritario de las mujeres, la probabilidad de afectarlas es mínima, e incluso se verifican resultados que profundizan las diversas formas de exclusión y discriminación.

Como ejemplo se puede señalar, el caso emblemático de una APP en salud en un país en desarrollo que hoy el costo del hospital para el Estado representa la mitad del gasto en salud y en pos de la eficiencia, este hospital generó un aumento de las cesáreas, en contra del derecho de las mujeres al parto natural⁴.

² Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2014). Official support for private investment in developing country infrastructure. Independent Evaluation Group of the World Bank (IEG-WB) (2012). World Bank Group Support to Public-Private Partnerships: Lessons from Experience in Client Countries, FY02-1202-12. Hildyard, Nicholas (2014). Public-Private Partnerships, Financial Extraction and the Growing Wealth Gap: Exploring the connections. The Corner House.

³ Alexander, Nancy (2015). Presentación realizada en evento de Regions Refocus. Nueva York, enero.

⁴ OXFAM (2014). A Dangerous Diversion. Will the IFC's flagship health PPP bankrupt Lesotho's Ministry of Health? Boston University. Lesotho Boston Health Alliance, Maseru (2013). Endline Study for Queen 'Mamohato Hospital Public Private Partnership (PPP).

Si la evidencia empírica existente acerca de los efectos positivos de las APP es mínima y puntual en algunas variables, sus efectos positivos sobre las mujeres y la reducción de la desigualdad de género es aún menor. Por lo tanto, no es posible promover las APP como el mecanismo privilegiado para el financiamiento del desarrollo y mucho menos su intervención en los servicios de salud y educación.

Finalmente, esta discusión debe formar parte de otra más amplia sobre la necesidad de hacer frente a los fracasos de los modelos económicos actuales y las crecientes desigualdades, erosión de los derechos humanos, impunidad y colapso ambiental que están generando y así lograr economías justas y saludables, que puedan formar la base para la realización del ejercicio de los derechos, autonomía y las libertades de las personas, y de las mujeres en particular.

* * * * *

Para obtener más información y otras declaraciones del Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo, ver www.wgonffd.org

Para versión en castellano haga click [aquí](#)

Preparatory Process for the Third International Conference on Financing for Development First Drafting Session

January 29th of 2015, Trusteeship Council Chamber, United Nations Headquarters, New York

Statement delivered by Veronica Serafini Geoghegan, Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) at the session on Domestic and International Private Finance.

My name is Veronica Serafini Geoghegan. I am part of Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) and the Women's Group on Financing for Development (WWG on FfD). During the different sessions many have referred the importance of effectively incorporating gender equality in the agenda. I would like to point out some specific issues on this matter:

- 1) In the first place, we advocate to respect the structure of the Monterrey Consensus analyzing separately the mobilization of private domestic resources and mobilizing international resources, including the Foreign Direct Investment.
- 2) Private finance cannot replace Government's role to mobilize maximum available resources to fulfill human rights and environmental sustainability. The private sector's role must be based on respect for labor and environmental rights, in full compliance with its tributary obligations.
- 3) It is necessary to overcome the paradigm of incentives for Foreign Direct Investment based on the "race to the bottom": lowering taxes and relaxing labor and environmental standards. Gender labor gaps should not be a variable for competitiveness.
- 4) We support the inclusion in the "[Elements Paper](#)" of the measure on analyzing the human rights impact of the trade and investment agreements; however, such assessments should be performed ex ante and ex post facto. The Addis Ababa outcome document should establish a binding multilateral instrument for monitor the private sector compliance with human rights obligations and environmental standards, in line with the resolution adopted at the Human Rights Council on this regard⁵.
- 5) Regarding financial inclusion, the empirical evidence indicates that the access to credit has contradictory effects on women. There have been found negative results in many programs as an excessive indebtedness and worsening of poverty conditions, especially if they are not accompanied by financial education and access to other productive resources from a rights perspective that would promote women's autonomy.
- 6) Regarding the link between Public-Private Partnerships (PPP) and women, while PPP has been functioning for several decades, there is insufficient empirical evidence regarding their successful performance in any of the dimensions that have served as an argument for implementation. Reports of the Organization for Economic Cooperation and Development

⁵ Resolution entitled "Elaboration of an international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights" (A / HRC / 26 / L.22), adopted on 26 June 2014 in the Human Rights Council UN in Geneva.

(OECD) and the Independent Evaluation Group of the World Bank (IEG-WB)⁶, universities and other academic institutions indicate that there are not enough studies and impact evaluations that take into account Public-Private Partnerships' efficiency, much less their socioeconomic equity.

Furthermore, existing studies indicate that barely 10% of the partnerships benefited people in situations of poverty. The only variable that had a positive result in some cases was the increased coverage, even though the evidence indicates failures. In addition to doubts about the positive results we can add fiscal risks. Various studies show overruns ranging from 60% to 1.900%⁷.

Few studies have incorporated social impact and gender equality approach. It is assumed that if services and infrastructure coverage is extended for the entire population, women would be benefited too. The "spillover" perspective has already been rejected, not only from the mainstream approach of economic growth to poverty, but also from the gender analysis. We are aware that if politics do not explicitly address women's rights in their goals and actions, the probability of positive impact is minimal. Furthermore, results that deepen the diverse ways of exclusion and discrimination are verified.

As an example that might be noted, the emblematic case of a PPP of health in a developing country that the hospital's cost represents the half of government health expenditures. In the interest of efficiency this hospital generated an increase in caesarean operations, against the women's right to natural childbirth⁸.

If the existing empirical evidence regarding positive effects of the PPPs is minimum and punctual in some variables, their positive effects on women and the reduction of gender inequality is even lower. Therefore, it is not possible to promote the PPPs as a privileged financing mechanism and especially for health and education services.

Finally, this discussion should be part of a broader one on the need to address the failures of the current economic models and growing inequalities, the erosion of human rights, impunity and environmental collapse that are being generated. And thus, achieve fair and healthy economies which may form the basis for implementing the exercise of rights, autonomy and the people's freedom, women's in particular.

* * * * *

For more information and other statements of Women's Group on Financing for Development, see www.wwgonffd.org

⁶ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2014). Official support for private investment in developing country infrastructure. Independent Evaluation Group of the World Bank (IEG-WB) (2012). World Bank Group Support to Public-Private Partnerships: Lessons from Experience in Client Countries, FY02-1202-12. Hildyard, Nicholas (2014). Public-Private Partnerships, Financial Extraction and the Growing Wealth Gap: Exploring the connections. The Corner House.

⁷ Alexander, Nancy (2015). Presentation at Regions Refocus event. New York, January.

⁸ OXFAM (2014). A Dangerous Diversion. Will the IFC's flagship health PPP bankrupt Lesotho's Ministry of Health? Boston University. Lesotho Boston Health Alliance, Maseru (2013). Endline Study for Queen 'Mamohato Hospital Public Private Partnership (PPP).